

Medellín, 28 de agosto de 2020

Señor  
Juez Constitucional de Reparto  
Bogotá, D. C.

**Asunto:** Acción de Tutela, Art. 86 de la CN y Dto. 2591/91.

**Referencia:** Contra Fallo de Tutela para Indexación Primera Mesada Pensional Conforme a Sentencia SU-1073 de 2012.

**Accionante:** Blanca Ligia Arango de Muñetón

**Accionados:** Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

**Blanca Ligia Arango de Muñetón**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 21.543.135, residente en el municipio de Medellín, Antioquia, obrando en mi propio nombre y en mi propia representación, comedidamente solicito a Usted señor Juez Constitucional, se sirva ***"Tutelar mis derechos fundamentales del debido proceso, de la seguridad jurídica, de la igualdad (jurídica), de la seguridad social, al del mínimo vital, de la vida digna, integridad personal, salud y protección al adulto mayor"***, que me fueron gravemente violentados y vulnerados por los Fallos de Primera y Segunda Instancia proferidos en la Acción de Tutela en primera instancia por la Magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO** y en segunda instancia por el Magistrado **LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**, siendo el de primera instancia a todas luces grosero con la majestad de la justicia, arbitrario, amañado e ilegal e inconstitucional, mientras que el de segunda instancia, aduciendo que la impugnación se presentó de forma extemporánea, no se pronunció de fondo frente a la abominable bellaquería y el aberrante adefesio de decisión tomada en primera instancia, como lo paso a enunciar de la siguiente manera.

#### **Hechos.**

- 1- Mi difunto esposo **JOSÉ PABLO MUÑETÓN LOPERA**, trabajó en Fabricato desde el 27 de mayo de 1957 hasta el 20 de mayo de 1974, es decir, laboró por diecisiete (17) años en dicha empresa.
- 2- El último cargo de mi difunto esposo **JOSÉ PABLO** fue el de Portero en la Sección de Seguridad con un **salario de \$99.00 pesos diarios**, por cuanto él laboraba domingos, días de fiesta, nocturnos y horas extras.
- 3- La empresa Fabricato realizó con mi esposo, una conciliación donde se le propuso el pago de una bonificación y una indemnización para que él accediera a retirarse voluntariamente de dicha empresa, quedando establecido que la misma le concedería la jubilación de acuerdo a la legislación colombiana, cuando él cumpliera los sesenta (60) años de edad.

- 4- El 16 de febrero de 1995, cuando mi esposo cumplió los sesenta (60) años de edad, reclamó a Fabricato la pensión que le había sido prometida y ésta le fue otorgada efectivamente a partir del 30 de mayo de 1997.
- 5- Comoquiera que el valor de la mesada pensional que se le reconoció a mi esposo fue el de **un salario mínimo vigente para 1995** y no se tuvo en cuenta el "ingreso base de liquidación" que él tenía para mayo de 1974, mi esposo solicitó que se le indexaran las mesadas, pero la empresa Fabricato, alegó que le estaba pagando el valor del salario mínimo establecido por el gobierno nacional, valor que superaba ampliamente lo que mi esposo ganaba para 1974.
- 6- Por esta razón, mi esposo mediante abogada, **presentó demanda laboral ante el Juzgado Laboral de Bello** para que se le indexaran las mesadas pensionales, ya que la liquidación efectuada por la empresa Fabricato no obedecía a la realidad salarial para 1974.
- 7- El **Juez Laboral de Bello**, con la información que le fue suministrada, logró determinar que mi esposo para 1974, ganaba 3.3 smmlv (**\$99.00 pesos diarios**) y que en esa razón se le debió haber efectuado la liquidación de la primera mesada pensional en 1995, para no perder el valor adquisitivo por la devaluación monetaria.
- 8- El **Juez Laboral de Bello**, en fallo de primera instancia del nueve (9) de agosto de 1999, decidió ordenar "la indexación de la primera mesada en la pensión **reconocida por Fabricato a mi esposo JOSÉ PABLO MUÑETÓN LOPERA**" e igualmente ordenó "revaluar la primera mesada por valor de \$249.883.<sup>62</sup>, reconocer y pagar reajustes a las mesadas por valor de \$9'620.205.<sup>75</sup>."
- 9- El abogado de la parte demandada (Fabricato) presentó recurso de apelación al fallo de primera instancia y la **Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín**, dictó el **1° de octubre de 1999 fallo de segunda instancia**, decidiendo **revocar** la "condena a revaluar la primera mesada por \$249.883.<sup>62</sup>", condenar a la empresa Fabricato "reconocer y pagar al señor José Pablo Muñetón Lopera" \$2.206.012 por valores adeudados por mesadas pensionales entre abril 12/96 y mayo 29 de 1997, por concepto de indexación un valor de \$377.669.<sup>00</sup>. (Adjunto copia del fallo de segunda instancia).
- 10- De esta forma, lo que un Juez había reconocido como un derecho, otro Juez de mayor jerarquía, lo revocó y dejó sin efectos legales, desconociendo el derecho; que hoy ha adquirido el carácter de fundamental, de indexar la primera mesada pensional para que esta obedezca a la realidad salarial y prestacional de quien se pensiona.
- 11- Valga la pena indicar que no se acudió al "Recurso Extraordinario de Casación" por cuanto para el año 1999, la doctrina imperante o reinante en el ámbito judicial, era la de no conceder la indexación

de la primera mesada pensional, ya que se argumentaba que las empresas no estaban obligadas a asumir la devaluación monetaria, además porque mi esposo y la suscrita no contábamos con recursos económicos para pagar a un profesional en derecho especializado en Casación, ya que existe una técnica para su presentación y sustentación y esto eleva a cifras exorbitantes los honorarios profesionales.

- 12- Mi esposo murió el 28 de febrero de 2012, disfrutando la pensión otorgada por la empresa Fabricato y que ascendía, como lo he dicho en renglones anteriores a un salario mínimo mensual legal vigente, es decir, a \$566.700.<sup>99</sup> pesos y por esta misma cantidad, Fabricato le cotizaba una pensión, para cuando el cumpliera los requisitos (tiempo de cotización mas no de edad), Colpensiones (anteriormente el ISS) le reconociera una pensión por valor de un salario mínimo mensual legal vigente. (Adjunto copia del certificado de defunción).
- 13- Mediante Resolución **GNR 306753 del 19 NOV 2013** Colpensiones me reconoció "pensión de sobrevivencia" por valor de un smmlv y que corresponde al valor por el que se venía cotizando, además solamente se me reconoció el derecho a una mesada adicional (mesada 13) por cuanto el reconocimiento de dicha pensión es a partir de marzo de 2012 y a la fecha, las pensiones no tienen derecho a la mesada 14. (Adjunto copia de la Resolución de Colpensiones GNR 306753 del 19 de noviembre de 2013 y Resolución GNR 246256 del 04 de julio de 2014, mediante la cual negó la mesada 14).
- 14- Para resumir y se comprenda mejor lo que ha y está pasando en mi caso, es lo siguiente: Mi esposo para 1974, cuando era trabajador activo de Fabricato, ganaba lo que equivalía a 3.3 smmlv y la pensión que le reconoció la empresa Fabricato fue el de un smmlv para 1995. Ante el fallecimiento de mi esposo y comoquiera que Fabricato le venía cotizando para una pensión equivalente a un smmlv, Colpensiones me reconoció una pensión de sobrevivencia por ese mismo valor más la mesada 13<sup>1</sup>, en conclusión, de la pensión que realmente debió disfrutar mi esposo y que después de su muerte, yo debiera estar disfrutando, **se me está dejando de desconocer 2.3 smmlv como valor real de la pensión que Fabricato nunca le reconoció a mi esposo y la mesada 14 que estaba estatuida para las pensiones reconocidas antes del 24 de julio de 2005.** Se puede afirmar por tanto, que Fabricato tiene la obligación de reconocermelos 2.3 smmlv y la mesada 14, ya que cuando mi esposo José Pablo se pensionó tenía el derecho a esta mesada.
- 15- Para el doce (12) de diciembre de dos mil doce (2012), la Corte Constitucional profirió la **Sentencia de Unificación SU-1073/12**,

<sup>1</sup> El Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política, vigente a partir del 25 de julio de 2005 dispone: "Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento". Sin embargo, el mismo Acto Legislativo exceptúa de la prohibición de percibir la Mesada 14, a "aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año".

mediante la cual reconoció que la “**indexación de la primer mesada**” conforme a la Constitución Nacional de Colombia” **es un derecho que tienen todos los pensionados** que no se les haya efectuado dicha actualización al momento de reconocimiento de dicha prestación social.

- 16- En lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez para que la suscrita haya acudido a la Acción de Tutela, **es necesario aclarar que en la Sentencia SU1073/12 se indicó que: “resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta característica hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios años de haberse proferido la decisión judicial”**, situación que hoy dos de septiembre de 2020 sigo incurso, pues sigo recibiendo una pensión por un salario mínimo legal vigente y no se me ha indexado la pensión a los 3.3 salarios mínimos que es el salario que ganaba mi difunto esposo y que es el Salario Base de Liquidación.
  
- 17- La Magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO** para negarme la protección de mis derechos y la indexación de mi pensión, **se apartó groseramente e ilegalmente de la Sentencia de Unificación SU-1073 de 2012** y señaló que: “En punto a la petición **encaminada a dejar sin efecto jurídico la sentencia proferida el 9 de agosto de 1999** por la Corporación accionada, de contera advierte la Sala, **la manifiesta extemporaneidad del reclamo y reproche tutelar, de lo cual surge la ostensible pérdida del principio de inmediatez que caracteriza la acción constitucional**”, lo que clara y evidentemente va en contravía de la línea jurisprudencial que establece la Corte Constitucional en la **Sentencia de Unificación SU-1073/2012** para resolver las Acciones de Tutela que se interpongan con el fin de que sean indexadas la primer mesada pensional y en consecuencia, las subsiguientes.
  
- 18- Continúa argumentando falazmente la Magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, que: ***“Téngase en cuenta que la responsabilidad de los asuntos propios demanda diligencia personal en cuanto al reclamo de los derechos, lo que lleva a estimar improcedente el recurso constitucional cuando, sin justificación atendible, como en el sub lite, no se ejercita en un plazo razonable, dentro del cual se presume que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable, al punto de exigir medidas inmediatas e impostergables. Así lo ha ilustrado la jurisprudencia constitucional, en la sentencia SU-961/1999”***, argumentos que son falsos por cuanto la suscrita como los accionantes en la **Sentencia de Unificación SU-1073 de 2012**, fuimos acuciosos y demandamos ante el Contencioso Laboral, pero de qué nos servía haberlo hecho, pues la jurisprudencia para la época consistía en no reconocer dicho derecho, razón por la cual siempre se negaba la indexación de la primer mesada de la pensión, es decir, prácticamente de nada servía demandar porque conforme a la doctrina existente, se iban a negar las pretensiones.



- 19- Pero lo que no se entiende es por qué razón la Magistrada **CLARA CECILIA** se apartó de la Sentencia de Unificación **SU-1073/2012**, por cuanto la creación de las Sentencias de Unificación por la Corte Constitucional tienen la finalidad de fijar criterios jurídicos y doctrinales para resolver casos que guardan algún grado de similitud o semejanza como el de la suscrita, además que los jueces están obligados a seguir la línea jurisprudencial, pues ello les brinda la seguridad jurídica a los que acuden a la justicia para que les resuelva determinado caso y, por último, la línea jurisprudencial asegura el derecho de la igualdad, pues las Sentencias de Unificación buscan que los casos que tienen los mismos elementos, se resuelvan de la misma forma.
- 20- Ante la aberrante y la abominable decisión tomada en el Fallo de Tutela, presenté impugnación al mismo por estar plenamente convencida que la Magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, no falló en derecho y que su decisión fue violatoria por vía de hecho, pues hizo argumentaciones mentirosas para no proteger mis derechos y se apartó sin motivos legales y jurisprudenciales de una Sentencia de Unificación proferida por la Corte Constitucional, que es el organo de cierre en la interpretación constitucional.
- 21- La impugnación la remití desde la Oficina de 4/72 en Bello, Antioquia, dentro de los términos de ley, no obstante el Magistrado **LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO** consideró que dicha impugnación la remití de forma extemporánea, lo que no es cierto y como lo puede certificar la citada de Oficina.
- 22- Solamente me imagino que no se dio trámite a la impugnación presentada al fallo de tutela de primera instancia, para proteger el mal actuar de la Magistrada **CLARA CECILIA** y para continuar pisoteando y masacrando mis derechos fundamentales, ya que todos los ciudadanos en este país sabemos que las decisiones judiciales en todos los niveles de la judicatura tienen precio y nosotros los que escasamente recibimos un salario mínimo, no tenemos el poder adquisitivo para comprar las mismas, con mayor razón si se tiene en cuenta que la justicia es un servicio gratuito y no se debe entender que sea una prostituta que está al servicio del mejor postor.
- 23- Por lo antes anotado y teniendo como soporte legal la Sentencia de Unificación **SU-1073/2012**, la Magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO** decidió ilegal y arbitrariamente apartarse de dicha sentencia de unificación y en consecuencia decidió no protegerme mis derechos fundamentales y el derecho de indexar la primer mesada de mi pensión, violentando nuevos derechos, como el de la seguridad jurídica y el de la igualdad.
- 24- A la fecha me ha sido imposible conseguir un abogado que me quiera representar y que presente la demanda laboral para que un juez ordene
-

la indexación, pues consideran que ya existe cosa juzgada y que no vale la pena intentar una nueva demanda, además que con un salario mínimo que ganó menusalmente por la pensión me imposibilita económicamente para pagar los honorarios de un abogado.

## Derecho.

Señor Juez, recurro a impetrar la presente acción por cuanto el artículo 86 de la Constitución, indica que la "Acción de Tutela" procede contra toda *"acción o la omisión de cualquier autoridad pública"*, y las autoridades judiciales son autoridades públicas (de hecho hacen parte del poder jurisdiccional) que en el ejercicio de sus funciones deben ajustarse a la Constitución Nacional y a la ley, por tanto es su deber y obligación garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos fundamentales consagrados y reconocidos en nuestra Carta Magna. Por esta precisa razón, la Corte Constitucional ha sentado línea jurisprudencial sobre la procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales que infringen, vulneran o desconocen los derechos fundamentales de las personas y que se apartan notablemente de los mandatos constitucionales, debiéndose tener en cuenta *"que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, en atención a los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela"*<sup>2</sup>.

Quiero resaltar que también me apoyo para presentar esta Acción de Tutela soportada en la **Sentencia de Unificación SU627/15** proferida por la Corte Constitucional y en la cual preceptuó que la **ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA** procede excepcionalmente cuando existe la concurrencia de determinados elementos que demandan la actuación inmediata del Juez Constitucional ***"para revertir o detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo"***, y continúa precisando que: ***"En la primera de ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional, "no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el valor de la justicia", de tal suerte que "las instituciones del Estado Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta"***. Por ello, en la Sentencia T-951 de 2013, al identificar la ratio decidendi de la Sentencia T-218 de 2012, precisa que la acción de tutela procede excepcionalmente contra una sentencia de tutela, cuando se satisfacen los siguientes requisitos: a) ***La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada.*** b) ***Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit).*** c) ***No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual"***, ya que la Magistrada CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO se apartó

<sup>2</sup> Sentencia T-255/13 de la Corte Constitucional, fechada el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013). Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

de la **Sentencia de Unificación SU-1073/2012** sin ningún fundamento jurídico o jurisprudencial que le permitiera hacerlo, pues ella como **JUEZ CONSTITUCIONAL**, para brindar transparencia e imparcialidad en sus decisiones, está obligada a respetar el precedente jurisprudencial, con mayor razón cuando ese precedente jurisprudencial proviene del órgano de cierre de la interpretación constitucional, función que le corresponde a la Corte Constitucional de Colombia, lo que convierte su decisión en arbitraria, amañada, ilegal y abiertamente inconstitucional, lo que no le está permitido a los jueces, los cuales no se pueden escudar en su independencia para tomar decisiones contrarias al ideal de justicia.

De hecho, la Corte Constitucional en la Sentencia SU1184/01 señaló sobre la obligatoriedad de la aplicación del **Precedente Judicial** por parte de todos los jueces, indicando que: **“La garantía de una interpretación uniforme de la Carta no se limita al ejercicio de las funciones unificadoras de la Corte Constitucional. Requiere, además, que las autoridades judiciales del país apliquen debidamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Para tal efecto, esta Corporación ha fijado una clara línea relativa a la obligatoriedad de su jurisprudencia para todos los jueces de la república. Dicha línea tiene por eje central dos elementos. De una parte, la fuerza erga omnes de las decisiones que se adoptan en los fallos de control constitucional abstracto de las leyes y, por otra, la protección del derecho fundamental a la igualdad en la aplicación del derecho”.** (Negritas, cursiva y subrayas fuera de texto)

La otra situación irregular y que resulta contrario a derecho, y con la que se le puso el moño final al desconocimiento de mis derechos fundamentales, fue la **decisión de abstenerse tomada por el Magistrado Ponente de la Segunda Instancia**, quien puede y está facultado para practicar pruebas de manera oficiosa, no haya solicitado al correo 4/72 la colilla de correo como constancia de envío del escrito de impugnación o también me la había podido solicitar, para verificar la remisión oportuna y dentro de los términos de ley del citado escrito y decide **abstenerse** de tomar decisión de fondo, **estando prohibido para él inhibirse o abstenerse**, ya que según el Auto 168A de 2015 proferido por la Corte Constitucional, el cual señala que: **“Sin embargo, en materia de tutela, el juez constitucional tiene una expresa prohibición legal y constitucional de proferir fallos inhibitorios. No puede olvidarse que la Constitución señala que el proceso de tutela es preferente y sumario y le impone al juez, en virtud del principio de oficiosidad, orientar el procedimiento para dar una solución al conflicto que se le plantea, que no es nada más y nada menos que la presunta vulneración de derechos fundamentales. Así, como impulsor del proceso, al juez le corresponde la obligación de corregir los errores en los que haya incurrido el actor al momento de presentar la tutela, integrar debidamente el contradictorio, solicitar pruebas y disponer de las conductas necesarias para tomar una decisión de fondo sobre los hechos puestos en su conocimiento, incluso sin necesidad de practicar pruebas”.** **“Por lo tanto, los jueces de instancia tienen total autonomía para tomar, dentro de los procesos de tutela, las decisiones que consideren más justas, equitativas y ajustadas a derecho, siempre teniendo como criterio orientador.”**<sup>3</sup> (Negritas, cursiva y subrayas fuera de texto)

<sup>3</sup> Autos 289 de 2001, A-287 de 2001.

<sup>4</sup> Auto 135 de 2008.



En igual sentido indicó en el Auto Ibídem que: **"Esta Corporación ha definido el alcance de un fallo inhibitorio, señalando que se pone fin a una etapa procesal sin tomar una decisión de fondo sobre el asunto planteado ante el juez, quedando sin resolver, por lo cual no opera el fenómeno de la cosa juzgada<sup>5</sup>. Tal como lo establece el artículo 333 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil<sup>6</sup>, "las sentencias que contengan una decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio", pues si no se juzga de fondo, "carece de toda lógica atribuir al acto judicial en que se consagra tal determinación -de no juzgar- el carácter, la fuerza y el valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la intangibilidad de "lo resuelto"<sup>7</sup>"**, razón por la cual se puede deducir, que si bien el Magistrado de Segunda Instancia profirió un auto interlocutorio mediante el cual se abstuvo de tomar decisión de fondo, este auto es igual o equivalente a auto inhibitorio comoquiera que no se resolvió de fondo la solicitud de tutelar los derechos fundamentales vulnerados, máxime que en él residía la facultad de practicar pruebas oficiosas para tomar una decisión de fondo y que pusiera fin a la vulneración de mis derechos. (Negrillas, cursiva y subrayas fuera de texto)

Como podrán observar en el diccionario de la lengua española aparece la palabra **abstenerse** como sinónimo de la palabra **inhibirse**, es decir esas dos palabras son equivalentes y eso es lo que hizo el Magistrado Ponente, intentar disimular su actuación grosera colocando una palabra diferente pero con igual sentido, estando obligado a pronunciarse de fondo para proteger mis derechos vulnerados.

De la misma forma presento la Acción de Tutela coadyuvada en la Sentencia T-255/13, pues si bien es cierto que se declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, también lo es que: "la Corte mantuvo abierta la posibilidad de interponer acciones de tutela contra providencias judiciales cuando éstas constituyeran manifiestas *vías de hecho*. Así, a partir de 1992, esta Corporación comenzó a admitir la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que constituyen vías de hecho, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias porque, por ejemplo, (i) se basan en normas evidentemente inaplicables (defecto sustantivo), (ii) son proferidas con carencia absoluta de competencia (defecto orgánico), (iii) se basan en una valoración arbitraria de las pruebas (defecto fáctico), o (iv) fueron proferidas en un trámite que se apartó ostensiblemente del procedimiento fijado por la normativa vigente (defecto procedimental). Con el paso del tiempo, el Alto Tribunal en su jurisprudencia fue identificando otros defectos constitutivos de vías de hecho<sup>8</sup>".

En la Sentencia SU1073/2012 proferida por la Corte Constitucional, se indica que: "Atendiendo los parámetros establecidos en los artículos 86 de la Constitución Política, 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos<sup>9</sup>, esta Corte ha decantado

<sup>5</sup> Sentencia C-258 de 2008.

<sup>6</sup> De acuerdo con el Decreto 306 de 1992, artículo 4 para la interpretación de las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 2591 de 1991, para el trámite de la acción de tutela, serán aplicables los principios generales del Código de Procedimiento Civil en las materias que no le sean contrarias.

<sup>7</sup> Sentencia C-666 de 1996.

<sup>8</sup> Sentencia T-352 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

<sup>9</sup> Artículo 25. Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso



progresivamente pautas respecto a las condiciones excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales”, principalmente cuando puede “considerarse que una actuación del juzgador, es manifiestamente contraria al orden jurídico o al precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”, aseveración que encuentra suficiente fundamento en la implementación por parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional basado, concretamente en: “(i) en el carácter normativo y supremo de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la interpretación de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus derechos fundamentales<sup>10</sup>”.

En la **Sentencia SU1073/12**, afirma la Alta Corte que: “La indexación se constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias<sup>11</sup>, es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada -entre las que se cuentan por supuesto- las obligaciones laborales. Lo anterior, en la medida en que la inflación produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. Tal actualización se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección periódica de las prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación” y cita que:

“La indexación ha sido definida como un *sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.*”<sup>12</sup>”. (Subrayas fuera del texto).

---

judicial, y c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados partes se comprometen:

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

<sup>10</sup> Sentencia T-078 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas.

<sup>11</sup> La doctrina distingue entre las obligaciones dinerarias y las obligaciones de valor, en las primeras “el acreedor obtiene, con la prestación de la suma de dinero que constituye el objeto de su crédito, un poder adquisitivo abstracto; en otras palabras, el dinero asume el carácter de una auténtica mercancía que se adquiere como tal y se constituye en objeto de la obligación del deudor, mientras que en las segundas “el dinero no es el objeto propio, pero como la moneda tiene la función de ser el común denominador de todos los valores, ella entra a ocupar el lugar del objeto propio, o sea, que no es la prestación originaria sino una prestación sustitutiva”. ERNESTO JIMÉNEZ DÍAZ, “La indexación en los conflictos laborales” en *Revista de Derecho Social*, No. 32, diciembre de 1991, p. 23-24.

<sup>12</sup> JIMÉNEZ DÍAZ, loc. cit., p. 25.

Se continúa afirmando en dicha **Sentencia SU1073/12** que: "El concepto de indexación, indización o corrección monetaria fue por primera vez establecido por los Decretos 677, 678 y 1229 de 1972, con el fin de incentivar el ahorro privado hacia la construcción. De la misma manera, el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 2282 de 1984, señalaba que las condenas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo podrían ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o el inciso final del artículo 308 del C.P.C. (modificado por el Decreto 2282 de 1989), el cual indicaba que la actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario se haría en el proceso ejecutivo correspondiente. De la misma manera, la Ley 14 de 1984 introdujo el reajuste periódico de los pagos tributarios al Estado y la Ley 56 de 1985 de los cánones de arrendamiento<sup>13</sup>".

De la misma manera dice que: "Las leyes 10 de 1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988, establecieron que las pensiones serían reajustadas, cada año, de acuerdo al aumento en el salario mínimo. Igualmente, algunos regímenes especiales como el de los congresistas, consagraron mecanismos para asegurar el poder adquisitivo de la prestación. Así, el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, dispuso que éstas se aumentarían en el mismo porcentaje que se reajusta el salario mínimo".

Por esta razón dice la Corte, es que la Sección Primera de la Corte Suprema de Justicia, "desde 1982 hasta el 18 de abril de 1999, acogió la fórmula de la indexación de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de estas pensiones ante el fenómeno de la inflación" y estos fueron los términos que se argumentó para tal decisión:

*"ii) La indexación laboral*

El derecho laboral es sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción —el trabajo, el capital y la empresa—, afectados directamente por la inflación. Sin embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4ª de 1976)".  
(Subrayas fuera de texto)

Se afirma en la Sentencia SU1073/12 para el año 2007, "la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en fallo del 31 de julio de 2007 M.P. Camilo Tarquino Gallego, estableció una **nueva orientación jurisprudencial** en relación con el

<sup>13</sup> Cfr. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

tema de la indexación de la mesada pensional y reconoció su procedencia, no sólo frente a las pensiones de carácter legal sino convencional”.

Apunta la Corte Constitucional que el derecho de la indexación de la primera mesada pensional tiene su fundamento en la jurisprudencia constitucional, pues el mismo se ha elaborado a partir de “una interpretación sistemática de los preceptos previstos tanto en el preámbulo de la Constitución Política, como en sus artículos 1°, 25, 48 y 53, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado, sobre el carácter constitucional del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una de cuyas manifestaciones más importantes es el derecho a obtener su actualización” y que puede indicarse que a partir de la Constitución Nacional de 1991, “la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones adquiere rango constitucional, contenido especialmente en los artículos 48 y 53 de la Carta”.

Ya que para el primero de ellos, “el Constituyente establece una obligación perentoria al legislador al consagrar que *“La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”*”, mientras que para el segundo, “el artículo 53 establece que *“el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”*”, finalizando su aseveración en que: “La Corporación ha considerado, además, que esta garantía se encuentra vinculada con el principio in dubio pro operario, los postulados del Estado Social de Derecho, la protección a las personas de la tercera edad, el derecho a la igualdad y al mínimo vital”.

Es importante citar que en la sentencia T-663 de 2003<sup>14</sup>, la Corte estudió el caso de varios trabajadores de Bancafé que adquirieron el derecho a la pensión después de varios años de retiro, razón por la cual el monto de su pensión fue sustancialmente inferior al salario que percibían en aquél entonces, así, por ejemplo, en uno de ellos el actor estuvo vinculado a Bancafé hasta marzo de 1983, fecha en la cual devengaba un salario equivalente a 7.74 salarios mínimos legales mensuales, mientras que en 1993 el Banco le reconoció una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual y ante este caso la Alta Corporación “amparó el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y revocó los fallos proferidos por la Sala de Casación Laboral, mediante los cuales no casaba las sentencias de segunda instancia que denegaban el reajuste de la mesada pensional en algunos casos; o en otros, revocó la decisión de primera instancia que había ordenado su reajuste. Así mismo, la Corte dejó sin efectos las sentencias proferidas dentro de las acciones promovidas por los afectados ante la justicia ordinaria y ordenó al juez natural o a la Sala de Casación Laboral decidir los recursos de casación, con sujeción a los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política”. Señaló así mismo la Alta Corporación que:

“Fueron razones fundadas en la ocurrencia de vías de hecho por parte de las autoridades judiciales y que admiten la intervención del juez constitucional; en la observancia de la igualdad y la confianza legítima en la aplicación de la ley; en la sujeción de los jueces a la doctrina probable, a la observancia de los postulados Superiores sobre el principio de favorabilidad y del principio pro operario; a los alcances de

<sup>14</sup> M.P. Jaime Córdoba Triviño



las disposiciones que regulan la pensión de jubilación; a la aplicación de los principios de equidad, la jurisprudencia y los principios generales del derecho y en la atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, las que condujeron a la Corte Constitucional a conceder la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social y del principio constitucional de favorabilidad a los entonces accionantes y, por la semejanza de situaciones, serán los mismos fundamentos que reiterará esta Sala para decidir en el proceso de revisión de los expedientes de la referencia". (Subrayas fuera del texto).

De lo anterior expresado concluye la Corte que: **"la jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional,** cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión. **Dicha garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta", interpretación que posibilita: "(i) proteger el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, (ii) garantizar que los pensionados reciban una pensión acorde con el esfuerzo realizado en su etapa productiva y (iii) otorga un tratamiento igual, por cuanto todos los pensionados se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, y por tanto, todos merecen la misma protección".**

Igualmente se afirma sobre el carácter universal que ha adquirido el derecho de indexar la primer mesada pensional, en cuanto que: "De conformidad con este carácter universal que la jurisprudencia ha reconocido al derecho a la indexación de la primera mesada pensional, es dado afirmar que éste cubija no sólo a las pensiones de los trabajadores del sector privado sino también a aquellas que provienen de relaciones de trabajo con el sector público, como quiera que el problema de la pérdida de poder adquisitivo, consecuencia del fenómeno inflacionario, afecta a todos por igual; una conclusión diferente impondría una carga desproporcionada a los pensionados del sector público en el sentido de tener que soportar la pérdida de poder adquisitivo de su mesada pensional."

**En lo que referente a lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez para la suscrita acudir a la Acción de Tutela, como ya lo afirmé, me apoyo en lo que se indicó en la Sentencia SU1073/12: "resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta característica hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios años de haberse proferido la decisión judicial.**

A renglón seguido, la Alta Corporación indicó que: **"En cuanto a la imprescriptibilidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional y su relación con el requisito de la inmediatez, señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-042 de 2011 que la negativa a su reconocimiento "(...) puede originar la vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho**



que implica una prestación periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los ex trabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente la acción”.

Comoquiera que mi esposo y/o la suscrita, no agotamos el recurso extraordinario de casación y por tanto se puede afirmar que no agotamos todos los recursos judiciales a nuestro alcance antes de acudir a la presente Acción de Tutela, no obstante se debe tener en cuenta la línea jurisprudencial asumida por la Alta Corte Constitucional que en la Sentencia T-046 de 2008, señaló que: **“en los casos de indexación de la primera mesada pensional, resultaba excesivo el agotamiento de dicho recurso para los casos fallados con anterioridad al cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”**, ya que solamente desde el año 2009 es que esa Corporación reconoció el derecho a la indexación de forma amplia, para las pensiones legales, las pensiones convencionales y la pensión sanción.

Señor Juez, señala el artículo 13 de la CN, que “Todas las personas somos iguales ante la ley” y el hecho de que a mi difunto esposo, y ahora a mí, no se nos haya ordenado la indexación de la primera mesada pensional, se nos está discriminando negativamente, pues ya se ha reconocido como un derecho universal y fundamental la indexación de esta mesada, ya son muchas las personas que se le ha indexado la primer mesada, mientras que mi pensión continúa sin que se ordene su indexación.

El derecho al mínimo vital se me está vulnerando por cuanto mi esposo trabajaba, el salario que percibía equivalía a 3.3 smmlv y además yo trabajaba de manera independiente porque yo era una mujer joven y trabajadora, pero hoy, cuando tengo 75 años de edad y los años empiezan a pesar más que nunca, apenas me puedo valer por mis propios medios, teniendo que sufragar mis gastos con la pensión que me reconoció Colpensiones y que asciende al valor de un smmlv, menos los descuentos de ley (salud), razón por la cual se ha deteriorado francamente mi poder adquisitivo. Ahora, si una no tiene con qué sustentarse sus gastos de manutención y salud, qué se puede pregonar de su dignidad, cuando a esta edad, más de ochenta años de edad, ya empezamos ser un estorbo físico y económico para nuestros seres más cercanos, como son hermanos, hijos y nietos.

En cuanto a la integridad física es necesario entender que ésta implica no tener ningún tipo de padecimiento que pueda atentar o menoscabar nuestro bienestar físico o mental, el cual se vio seriamente amenazado por no contar con el dinero para atender nuestras necesidades primarias de alimentación y salud, pues no tener con qué comprar una adecuada alimentación, puede contribuir a aumentar nuestro deterioro físico.

De la misma forma, el artículo 46 de la CN, indica que **“el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la**

**tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria**, razón por cual, las personas de la tercera edad, somos sujetos de protección especial de orden constitucional y entre esas garantías de protección especial está la de que se nos garanticen el cumplimiento efectivo de nuestros derechos, entre ellos los de orden constitucional como es el caso de la indexación de la primera mesada pensional.

En tanto el artículo 48 de la CN, señala que **“La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”**, derecho que me ha sido vulnerado en cuanto no se me ha garantizado que la pensión de mi esposo (y ahora la mía) no pierda el poder adquisitivo, pues si mi esposo y la suscrita sacrificaron parte de la convivencia y la crianza de los hijos para que él mejorara su salario, era para que él, cuando llegara el momento disfrutara de una pensión que nos permitiera vivir dignamente, lo que no fue posible por cuanto una vez reconocida la pensión y no se lograra vía judicial su respectiva indexación, nos obligó a seguir luchando y trabajando para lograr nuestro sustento económico.

#### **Juramento.**

Me sirvo manifestar bajo la gravedad del juramento, que no he presentado Acción de Tutela contra Fallo de Acción de Tutela (Tutela contra Tutela) sobre estos mismos hechos y derechos, Tutela que fue surtida en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

#### **Pretensiones.**

Señor Juez, con el fin de tutelar mis derechos fundamentales arriba invocados, comedidamente le solicito se sirva ordenar lo siguiente:

- 1- Revocar y dejar sin efectos los Fallos de Tutela de primera instancia proferida por la Magistrada **CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**, lo mismo que el de segunda instancia proferido por el Magistrado **LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**, ambos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
- 2- Revocar y dejar sin efectos la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Laboral de Bello, lo mismo que el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
- 3- Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la empresa Fabricato indexar la mesada pensional desde que se ocasionó la pensión hasta la fecha actual, comoquiera que la indexación de la misma es un derecho cierto e indiscutible.
- 4- Ordenar a la empresa Fabricato que a partir de la fecha me pague los 2.3 smmlv y la diferencia de la mesada 14 causadas desde que se causó la pensión de mi esposo.
- 5- De igual forma, comoquiera que la pensión de sobrevivencia que me reconoció Colpensiones es por un smmlv y una mesada adicional (mesada 13), ordenar a la empresa Fabricato para que me siga pagando

el faltante a partir de la fecha del fallo de tutela y hacia el futuro, los 2.3 smmlv y la mesada 14, ya que esta es la pensión real que se le debió haber reconocido a mi difunto esposo y que yo actualmente debería estar disfrutando, por ser bajo la modalidad desustitución pensional y no de sobrevivencia.

#### Pruebas.

Para demostrar lo anterior, comedidamente informo que alguna de las pruebas debe obrar en el cuaderno de la Acción de Tutela con Radicado **STL17417-2015, (Radicación Nro. 42042)** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para este caso adjunto:

- a-) Fotocopia de mi cédula de ciudadanía.
- b-) Fotocopia fallo de tutela de primera instancia.
- c-) Fotocopia fallo de tutela de segunda instancia.

Por lo antes expuesto y comoquiera que no se tomó una decisión de fondo que le diera una solución definitiva a los derechos invocados, solicito que se estudie la presente Tutela y se tome una decisión conforme a derecho y al precedente judicial. También quiero manifestar que estos hechos son como los he dado conocer y para tal efecto adjunto las pruebas que así lo demuestran.

#### Notificaciones.

1. La empresa Fabricato Sura recibe notificaciones personales en la Cra. 50 Nro. 38 – 320, Bello, Antioquia. Tels.: (4) 4483500. Fax: (4) 2753875.
2. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la calle 12 Nro. 7 – 65, Bogotá D.C. Conmutador, 5622000.
3. El Juzgado Laboral del Circuito de Bello, en la Calle 47 Nro. 48 – 51, Bello, Antioquia.
4. El Tribunal Superior de Medellín, en la Calle 14 Nro. 48 – 42, Sede del Poblado, Medellín. Tel.: 3521029.
5. La suscrita recibe notificaciones personales en la Carrera 78 B Nro. 54 – 15, Medellín, Antioquia. Tel. 5090832 ó Celular 3113709186.

Atentamente,

Firma del accionante,



Blanca Ligia Arango de Muñetón

Identificación

CC 21.543.135

E-mail: *ligia la zarca@gmail.com*



Corte Suprema de Justicia  
Secretaría Sala de Casación Laboral

Bogotá D.C., 8 de Febrero de 2016

**CTA-CTE N° 12899999104**

CSJ/SSCL/ TELEGRAMA No. 5045

**SEÑORA**  
**BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETON**  
**CARRERA 78 B N° 54 - 15**  
**TELEFONO. 4825444 CEL. 3113709186**  
**MEDELLIN (ANTIOQUIA)**

**Magistrada ponente: DRA. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**

**REF. INTERNA ACCIÓN TUTELA No. 42042**  
**RADICADO ÚNICO: 110010205000201501571-00**  
**ACCIONANTE: BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETON**  
**ACCIONADO: SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**

Notifícole que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema mediante providencia del 3 de febrero de 2016, resolvió: "Para ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se concede la impugnación que presentó la parte accionante contra la decisión de primera instancia. Por la Secretaría, remítase el expediente a dicha Sala, conforme a lo ordenado por el Artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, en armonía con el 50 del Acuerdo No. 001 de marzo 7 de 2002 (Reglamento de la Corte)".

Cordialmente,

**DINORA C. DURAN NORIEGA**  
Secretaría Sala de Casación Laboral

Corte Suprema de Justicia Secretaría Sala de Casación Laboral  
Calle 12 N° 7-65 Palacio de Justicia Oficina 103 - Fax 5822000 ext. 5615-16-17

PROYECTO MARÍA L. CORTIÉREZ CABARCAS  
OFICIAL MAYOR



Bello, abril 14 de 2016

Doctora  
**MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ**  
 Secretaria General  
 Corte Constitucional  
 Carrera 8 Nro. 12 A – 19.  
 Bogotá, D. C.

*Solicitud Revisión  
 Fallo Tutela*

**Referencia: Acción de Tutela Enviada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Mediante Oficio 8239 de abril 4 de 2016. Radicado 11001020500020150157102.**

**Accionante: Blanca Ligia Arango de Muñetón**

**Accionados: Tribunal Superior de Medellín, Juzgado 2º Laboral de Bello y Fabricato, S. A.**

**Asunto: Solicitud Revisión Fallo de Tutela**

Blanca Ligia Arango de Muñetón, persona mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, comedidamente **elevó solicitud** conforme al artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, para que se haga la **"Revisión de la Tutela"** enviada a esa Honorable Corte por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que fuera enviada con oficio **8239** del pasado 4 de abril de 2016 con el número **de radicado 11001020500020150157102**, en la que mediante auto interlocutorio del 17 de marzo de 2016, el Magistrado Ponente de Segunda Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió **"abstenerse de proferir el fallo de segunda instancia"** porque supuestamente el escrito de impugnación se presentó por fuera de los términos del Decreto 2591 de 1991, situación que no es cierta y que no obedece a la realidad, pues como se puede observar en la colilla de correo (adjunto copia) con la cual se remitió el citado escrito, éste se remitió exactamente el viernes 22 de enero de 2016, estando dentro de los términos legales, razón por la cual considero que sin ninguna justificación legal se me negó el derecho fundamental del acceso a la justicia, solamente esperando que ustedes como Tribunal de cierre, me lo garanticen y me lo hagan efectivo profiriendo el respectivo fallo en sede de revisión.

Para una mayor ilustración de lo que ha pasado con el trámite de la Acción de Tutela que interpuse y se percaten de las arbitrariedades que han cometido los dos Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, tanto el de primera como el de segunda instancia, les hago un breve recuento con relación a los hechos que

han rodeado a la misma, la cual formulé para que se me indexara la primer mesada pensional por parte de la empresa Fabricato, S. A.

1-. El 26 de noviembre de 2015 radiqué en los Juzgados de Bello, Antioquia, la Acción de Tutela para que se ordenara Revocar la decisión proferida por el Juez Segundo Laboral de Bello y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, y se ordenara a Fabricato, S. A., la indexación de la primera mesada pensional.

2-. La Acción de Tutela fue remitida a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá y para el 3 de diciembre de 2015 fue radicada.

3-. El 15 de diciembre de 2015 se emite fallo de primera instancia mediante el cual **se niega la indexación de la primera mesada pensional**, sustentando la Magistrada Ponente su decisión en la Sentencia SU-961/1999 y decide no acoger los criterios de la Sentencia SU 1073/2012, la cual es específica para la resolución de los casos de la indexación de la primera mesada, apartándose así de su deber legal de decidir conforme a la jurisprudencia imperante y prevaricando en su decisión, pues qué sentido tiene que las Cortes emitan Sentencias de Unificación si los jueces las van a utilizar discrecionalmente y de manera abiertamente arbitraria, violentando el principio de igualdad en todas las decisiones judiciales, pues no justo y correcto que ante la misma situación, se tomen decisiones diferentes.

4-. Solamente para el 20 de enero de 2016 se me notificó de la decisión de primera instancia. (Adjunto copia).

5-. El 22 de enero de 2016 remití por correo ordinario (4/72) el escrito de impugnación por no estar de acuerdo con la decisión tomada, el cual fue entregado en la Corte Suprema de Justicia el 25 de enero de 2016, pero que fue radicado el 26 de enero de 2016.

6-. La Magistrada Ponente, comoquiera que solamente fui notificada del fallo de primera instancia para el 20 de enero de 2016, practicó pruebas para verificar si en efecto se me notificó para la fecha indicada, recibiendo **respuesta afirmativa** por parte de Wilson Santamaría Carrillo, en calidad de Asesor de Peticiones, Quejas y Recursos de 4/72.

7-. El 3 de febrero de 2016 se concede la impugnación y se remite al competente para desatar la impugnación.

8-. El 17 de febrero de 2016 (14 días después) se remite el proceso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y el 19 de febrero de 2016 se radica la Tutela en dicha Sala.

9-. El 18 de marzo de 2016, el Magistrado Ponente en calidad de Segunda Instancia, **emite auto interlocutorio** mediante el cual se **abstiene de proferir**

**fallo, argumentando que la impugnación se presentó en forma "extemporánea", es decir, para el 26 de enero de 2016, lo que no es cierto, pues el escrito de impugnación se remitió el 22 de enero de 2016 por correo ordinario.**

10-. Resulta extraño que la Magistrada Ponente que actuó como primera instancia, **haya practicado pruebas para conceder la impugnación**, la que finalmente concedió porque pudo verificar que solamente hasta el 20 de enero de 2016, se me notificó de dicha decisión, mientras que el Magistrado Ponente de Segunda Instancia **no haya practicado pruebas para verificar la fecha exacta de la remisión del escrito de impugnación a esa Corte**, tomando una decisión que no sólo vulnera el debido proceso, sino que también me vulnera, y de manera grave, el derecho fundamental del acceso a la justicia.

11-. Desde que presenté la acción de tutela hasta la fecha, han pasado cuatro meses y medio y por las decisiones arbitrarias y contrarias a derecho que se han tomado, se me ha impedido acceder a la Justicia, derecho fundamental estatuido en nuestra legislación y en los Convenios Internacionales suscritos por el Estado colombiano.

Con la actuación de los dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se puede evidenciar claramente que han cometido la conducta descrita por la Corte Constitucional en la **Sentencia T-218/12, cuando se dice que: "La cosa juzgada**

**fraudulenta se presenta cuando la actuación aviesa al derecho se materializa en la providencia, mientras que el fraude procesal no necesariamente se reviste o tiene la calidad de la cosa juzgada. En este sentido, para diferenciar ambos conceptos, Véscori plantea que la cosa juzgada fraudulenta se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad"** peor resulta que afrenta con su grosero actuar la dignidad y magnificencia de la justicia, pues la primera instancia se apartó de jurisprudencia unificada que ha sentado la Corte Constitucional (SU-1073/2012) como criterio para garantizar la unificación de las decisiones ante las mismas situaciones, el principio de seguridad jurídica y el de la igualdad, entrando a tomar una decisión lesiva para la suscrita y la sociedad; mientras que el Magistrado de segunda instancia, sin verificar la fecha de envío del escrito de impugnación, decidió abstenerse mediante auto interlocutorio vulnerando mis derechos fundamentales y encubriendo con la decisión a la Magistrada de primera instancia, olvidándose los dos de impartir justicia y de proteger los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.

De igual manera se señaló en la sentencia SU-120 de 2003 con relación a la labor de unificación de jurisprudencia que ejerce la Corte Suprema de Justicia que pretende dar consistencia al ordenamiento jurídico y que debe ser considerada porque: **"i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son iguales ante la ley -porque las situaciones idénticas son resueltas de la**

misma manera -, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad individual - por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta [sic] permite a los hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo -, y iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de buena fe -porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los intereses particulares en litigio", viéndome yo no solamente asaltada sino perjudicada por tan arbitraria decisión.

Adjunto prueba de todas las afirmaciones que he realizado, esperando que se me conceda la **Revisión de la Tutela** y se falle en derecho concediéndome lo **petita** y lo **ultrapetita**, comoquiera que si se revoca los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Laboral de Bello y de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, no quedan derechos en discusión, de lo contrario quedará maniatada y no podré iniciar ningún tipo de acción, pues la contraparte alegará cosa juzgada y así no prosperará nada, salvo que se revoquen las citadas decisiones.

Le agradezco la atención en acceder a la presente solicitud de revisión de tutela.



Blanca Ligia Arango de Muñetón

CC 21.543.135

Dirección: Carrera 78 B Nro. 54 – 15, Medellín, Antioquia.

Teléfono: 4825444

Anexo: Pantallazos Impresos, Colilla de Correo.



Al responder cite este número  
OFI16-0013016-OAJ-1500

Bogotá D.C., miércoles, 18 de mayo de 2016

Señora  
**Blanca Ligia Arango de Muñeton**  
Carrera 78 B No. 54-15  
Medellín - Antioquia

**Asunto:** Respuesta a la petición EXT16-0017723 del 16 de mayo de 2016. Traslado por competencia.

Respetada señora Arango,

En atención a su petición dirigida al Ministerio de Justicia y del Derecho, con radicado interno EXT16-0017723 del 16 de mayo del año en curso, en la que solicita la intervención y seguimiento a denuncia penal y queja contra Luis Guillermo Salazar Otero y Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nos permitimos informarle que hemos dado traslado de la misma, a la Secretaria General de la Cámara de Representantes con el OFI16-0013010-OAJ-1500 del 18 de mayo de 2016, por considerar que su atención le corresponde a la Cámara de Representantes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Constitución Nacional y el artículo 112 parágrafo segundo de la Ley 270 de 1996.

Respecto a la solicitud de la referencia, es necesario mencionar que i) tema de su petición no guarda relación con las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho contenidas en el Decreto Ley 2897 de 2011, y adicionalmente, ii) esta Cartera Ministerial no puede intervenir en las decisiones tomadas por la Rama Judicial ya que el artículo 228 de la Constitución Política establece la Administración de Justicia como función pública y sus decisiones son independientes. Por su parte, el artículo 5 de la Ley 270 de 1996 señala que la Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función de administrar justicia y ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional, como tampoco las autoridades administrativas, podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.

Bogotá D.C., Colombia  
Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • [www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

Dicho traslado, se realiza en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo primero de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

  
**Carolina Murillo Junco**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Anexo: 1 Folio  
Elaboró: César Andrés Landínez Briceño.  
Radicado: EXT16-0017723 del 16 de mayo de 2016.

Bogotá D.C., Colombia  
Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • [www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

Al responder cite este número  
OF116-0013010-OAJ-1500

Bogotá D.C., miércoles, 18 de mayo de 2016

Doctor  
**Jorge Humberto Mantilla Serrano**  
Secretario General Cámara de Representantes  
Calle 10 N° 7-50  
Bogotá

**Asunto:** Remisión, solicitud de intervención y seguimiento a denuncia penal y queja, de Blanca Ligia Arango de Muñetón contra Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Respetado doctor Mantilla:

Por la naturaleza del tema, y las funciones atribuidas a la Cámara de Representantes, en virtud del artículo 178 de la Constitución Nacional y del artículo 112 parágrafo segundo de la Ley 270 de 1996, damos traslado de la comunicación suscrita, por la señora Blanca Ligia Arango de Muñetón, radicada en esta Entidad bajo el EXT16-0017723 el 16 de mayo de 2016, mediante la cual solicita la intervención y seguimiento a denuncia penal y queja contra Luis Guillermo Salazar Otero y Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior debido a que la referida solicitud, no guarda relación con las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho contenidas en el Decreto Ley 2897 de 2011.

Dicho traslado, se realiza en cumplimiento de lo señalado en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo primero de la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,

**Carolina Murillo Junco**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Anexo: 27 folios  
Elaboró: Cesar Andrés Landínez Briceño.

Bogotá D.C., Colombia  
Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • [www.minjusticia.gov.co](http://www.minjusticia.gov.co)

OFI16-00044449 / JMSC 111102  
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C. miércoles, 18 de mayo de 2016

Señora  
BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETÓN  
Carrera 78 B No. 54 - 15  
Medellín, Antioquia  
OFI16-00044449

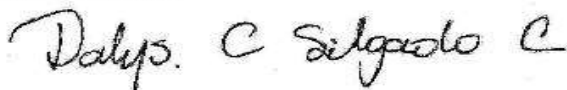
Asunto: EXT16-00044603 Solicitud de intervención y seguimiento a Denuncia Penal y queja contra Magistrados

Respetada señora Blanca Ligia:

Hemos recibido su comunicación, la cual fue radicada con el número registrado en el asunto, al respecto le informo que ésta le hemos dado traslado al Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con la Ley 1755 de 2015 mediante el oficio fechado el día de hoy.

En esa medida, será esa entidad la competente para absolver las inquietudes que usted formuló en su escrito. Por lo anterior le sugerimos comunicarse con dicha entidad ya que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República No es la entidad competente para responder de fondo su solicitud.

Cordialmente,



DALYS CECILIA SILGADO CABRALES  
Asesora Grupo de Atención a la Ciudadanía

Anexo: Lo enunciado en 1 folio  
Elaboro: Graciela R.

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia  
PBX (57 1) 562 9300  
Código Postal 111711  
[www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)





OFI16-00044448 / JMSC 111102  
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C. miércoles, 18 de mayo de 2016

Doctor  
JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO  
Presidente Sala Jurisdiccional Disciplinaria  
Consejo Superior de la Judicatura  
Calle 12 No. 7 – 65  
Bogotá  
OFI16-00044448

Asunto: EXT16-00044603 Solicitud de intervención y seguimiento a Denuncia Penal y queja contra Magistrados

Respetado Doctor Claros:

De manera atenta le informo, que hemos recibido la comunicación citada en el asunto, la cual fue remitida a través de esta Entidad por la señora Blanca Ligia Arango de Muñetón.

Por considerar, que se trata de un asunto relacionado con las funciones de su cargo, doy traslado del mismo para lo de su competencia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con la Ley 1755 de 2015.

Cordialmente,



DALYS CECILIA SILGADO CABRALES  
Asesora Grupo de Atención a la Ciudadanía

Anexo: Lo enunciado en 27 folios  
Elaboro: Graciela R.

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA  
Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia  
PBX (57 1) 562 9300  
Código Postal 111711  
[www.presidencia.gov.co](http://www.presidencia.gov.co)



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA DE CASACIÓN LABORAL**

**CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**  
**Magistrada ponente**

**STL17417-2015**  
**Radicación n.º 42042**

**Acta no. 45**

Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil quince (2015).

Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, respecto de la demanda de tutela presentada por **BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETÓN**, contra la **SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, trámite al cual se vinculó al **JUZGADO ÚNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO**, a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** y a los demás intervinientes en el proceso ordinario laboral génesis de la presente acción.

---

## I. ANTECEDENTES

**BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETÓN**, instauró acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la **IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA, SALUD «INTEGRIDAD PERSONAL y PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR»**, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.

Indica que su cónyuge el señor José Pablo Muñetón presentó demanda ordinaria laboral contra la Empresa Fabricato S.A., con miras a obtener la indexación de la primera mesada pensional. Que dicho trámite, se adelantó ante el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, autoridad que en sentencia de 9 de agosto de 1999, accedió a las pretensiones de la demanda.

Expuso que la anterior decisión fue apelada por la parte demandada ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, Corporación que en providencia de 1° de octubre de 1999, revocó la condena a *«revaluar la primera mesada por \$249.883»* y condenó al pago de \$2.206.012 por *«valores adeudados por mesadas pensionales entre abril 12/96 y mayo 29 de 1997, por concepto de indexación un valor de \$377.669»*.

Refiere que no interpuso recurso extraordinario de casación por cuanto para el año 1999, la *«doctrina imperante o reinante en el ámbito judicial, era la de no conceder la indexación de la primera mesada pensional, ya que se argumentaba que las empresas no estaban obligadas a asumir la devaluación monetaria, además*

---

*porque (...) no conta[ba] con recursos económicos para pagar a un profesional en derecho especializado en casación».*

Informa que el 28 de febrero de 2012 falleció Muñetón Lopera, quien disfrutaba de la pensión en cuantía de un s.m.l.m.v., sobre la cual Fabricato cotizaba a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

Refiere que Colpensiones mediante la resolución GNR 306753 de 19 de noviembre de 2013, reconoció a su favor la pensión de sobrevivientes en cuantía de un s.m.l.m.v., además, reconoció la «*mesada 13 adicional*» fundada en que el reconocimiento de dicha pensión fue a partir de marzo de 2012.

Cuestionó que la primera mesada pensional indexada de José Pablo Muñetón equivalía a 2.3 s.m.l.m.v. y, que como éste percibió la mesada catorce, la beneficiaria de la pensión de sobreviviente, también tiene derecho a ella.

Acude entonces al presente mecanismo de amparo constitucional, para que se deje sin valor y efecto las decisiones proferidas el 9 de agosto de 1999 y 1° de octubre de 1999, por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, respectivamente, para en su lugar, ordenar a la Empresa Fabricato S.A. indexar la mesada pensional desde «*diciembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2012*».

---



Adicionalmente, solicita se ordene a la Empresa Fabricato S.A., cancelar los 2.3 s.m.l.m.v. y la mesada 14 causadas desde marzo de 2012 hasta la fecha. Así mismo, ordenar a la empresa Fabricato S.A. que cancele el pago del *«faltante a partir de la fecha del fallo de tutela y hacia el futuro, los 2.3 smmlv y la mesada 14»*, toda vez que la pensión de sobreviviente que reconoció Colpensiones equivale a un s.m.l.m.v.

Mediante auto proferido el 4 de diciembre de 2015, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Sala accionada y vincular a los demás intervinientes en el proceso laboral que originó la tutela que nos ocupa, a fin de que ejercieran los derechos de defensa y contradicción a su favor.

## **II. CONSIDERACIONES**

El art. 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares, en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no se cuente con otro medio de defensa judicial o cuando, de existir, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.

---

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución o que, encontrándose consagrados en otros acápites de ese estatuto, adquieren tal categoría por conexidad.

Del examen y análisis del caso que ocupa la atención de esta Sala, se advierte que la acción de tutela está orientada a que se: (i) deje sin efecto jurídico la sentencia de 9 de agosto de 1999 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y, en consecuencia, se ordene indexar la primera mesada pensional de José Pablo Muñetón Lopera y, (ii) se reconozca el pago de la mesada catorce como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

En este orden se adentra la Sala a estudiar el accionamiento constitucional puesto a su consideración:

1. En punto a la petición encaminada a dejar sin efecto jurídico la sentencia proferida el 9 de agosto de 1999 por la Corporación accionada, de contera advierte la Sala, la manifiesta extemporaneidad del reclamo y reproche tutelar, de lo cual surge la ostensible pérdida del principio de inmediatez que caracteriza la acción constitucional.

Téngase en cuenta que la responsabilidad de los asuntos propios demanda diligencia personal en cuanto al

---

reclamo de los derechos, lo que lleva a estimar improcedente el recurso constitucional cuando, sin justificación atendible, como en el *sub lite*, no se ejercita en un plazo razonable, dentro del cual se presume que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable, al punto de exigir medidas inmediatas e impostergables. Así lo ha ilustrado la jurisprudencia constitucional, en la sentencia SU-961/1999.

En ese orden de ideas y dado que el término que ha transcurrido entre los hechos que se estima lesivos de los derechos fundamentales, contabilizados desde la fecha en que fue proferida y la interposición de la presente acción -3 de diciembre de 2015-, supera con amplitud la temporalidad de seis (6) meses que ha considerado razonable, la jurisprudencia de esta Sala, sin que se tenga por acreditada con las pruebas allegadas, la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad de la promotora por lo que resulta improcedente el amparo deprecado.

En todo caso si se atendiera la censura frente a la providencia del Tribunal accionado, mediante la cual negó la indexación de la primera mesada pensional, tampoco se observa vulneración a derecho fundamental alguno, dado que a juicio de esta Corporación, dicha decisión es razonable, en tanto se emitió en vigencia del criterio que, para dicha data, se sostenía, frente a la inaplicación de la indexación de la primera mesada pensional por lo que, no es plausible reprochar, por vía constitucional, la autonomía

---

de los juzgadores, pues ello implicaría desconocer decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas, lo que atentarian contra el principio de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Lo anterior en modo alguno desconoce la evolución jurisprudencial que ha existido sobre la indexación, pues las decisiones judiciales emitidas en vigencia de la doctrina que la consideraba inviable, son válidas, cosa diferente acontece hoy por hoy, con aquellas decisiones que se adopten en los procesos en curso, las cuales deben ajustarse al criterio imperante.

2. Ahora en lo atinente al reconocimiento de la mesada catorce como beneficiaria de la pensión de sobreviviente, tampoco es posible colegir que la presente acción es procedente para obtener su pago, por cuanto la solicitud de amparo no consulta el principio de inmediatez, dado que la resolución no. 246256 mediante la cual se negó la referida mesada, fue proferida el 4 de junio de 2014 por Colpensiones.

Aunado a ello, tampoco se demostró que haya agotado actuación alguna para solicitarla dentro de las acciones ordinarias, por lo que este mecanismo *ius* fundamental no puede utilizarse para controvertir dicha negativa, en la medida que para ello, el ordenamiento jurídico ha previsto acciones idóneas ante jurisdicción ordinaria.

---



De ahí que la parte interesada pudo, y aún puede, hacer uso de los mecanismos legales y acudir a la jurisdicción correspondiente para que se dirima la controversia por medio del agotamiento de las formas propias del proceso que la Ley ha consagrado.

Se resalta entonces, que una de las principales características de este dispositivo constitucional es su residualidad, que lo convierte en la última herramienta de la que pueda hacer uso una persona para proteger los derechos que cree desconocidos, presupuesto que aquí, se itera, no se encuentra satisfecho, como tampoco se evidencia existencia de un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, resultan suficientes para denegar el amparo solicitado.

### **III. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** la tutela de los derechos invocados, de conformidad con las razones acotadas en precedencia.

---

**SEGUNDO: NOTIFICAR** a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO: REMITIR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

**CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO**

Presidenta de Sala

**JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ**

**RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO**

**GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA**

---

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SALA DE CASACIÓN PENAL  
-SALA DE DECISION EN TUTELA-**

**LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**  
**Magistrado Ponente**

**ATP1661-2016**

**Rad. 84526**

Aprobado Acta No. 86

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016)

**ASUNTO**

Decidir lo pertinente en relación con la impugnación interpuesta contra el fallo de fecha 15 de diciembre de 2015 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual negó la protección constitucional invocada por BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETÓN, en contra de la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, extensiva al Juzgado Único Laboral del Circuito de Bello y la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES; por la presunta violación de sus derechos fundamentales.

**1. CONSIDERACIONES**

---

1. Sería el caso que la Sala se ocupara de resolver la impugnación interpuesta, si no fuera porque se le impone abstenerse de ello ya que de la revisión de las diligencias, se concluye que la misma se torna extemporánea.

2. En efecto, se tiene que:

2.1. La Sala Especializada aludida, mediante fallo proferido el 15 de diciembre de 2015, negó la protección constitucional invocada por la accionante en contra de la Sala Laboral del Tribunal de Medellín, extensiva al Juzgado Único Laboral del Circuito de Bello y la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

2.2. La comunicación enterando a la accionante se remitió el 12 de enero del año en curso.

2.3. El 26 de enero posterior se recibió el memorial de impugnación<sup>1</sup> en la Secretaría de la Sala de Casación Laboral remitente, y al inicio del mismo, manifiesta la actora impugnar la sentencia al encontrarse “...en el término de tiempo señalado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 comoquiera que el fallo de tutela me fuera notificado el pasado 20 de enero de 2016...”

---

<sup>1</sup> Folio 33 y s.s. Cdno Sala de Casación Laboral



3. Entendiendo entonces que la parte actora se dio por notificada tras tener conocimiento del fallo que le fue desfavorable el día miércoles 20 de enero de los cursantes, no puede concluirse cosa distinta a que omitió presentar el recurso dentro del plazo estipulado en el Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 31 establece que: *“Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.”*

Plazo que para el caso concreto comprendía los días hábiles 21, 22 y 25 siguientes de mismo mes, sin que en tal interregno hubiese manifestado la intención de impugnar, lo cual sólo se hizo ante el a quo, repítase, hasta el día 26 posterior, de modo que la impugnación es extemporánea y por ende la Sala se abstendrá de dirimirla.

4. En consecuencia, envíense las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, no sin antes comunicar la presente determinación a la impugnante.

\* \* \* \* \*

En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela,

---

**RESUELVE**

Primero-. Abstenerse de desatar la impugnación propuesta contra el fallo de fecha 15 de diciembre de 2015, proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETÓN, por las razones expuestas en este proveído.

Segundo-. Enviar las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero-. Notifíquese esta decisión en la forma prevista por el Decreto 2591 de 1.991.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO**

**GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ**

---



República de Colombia  
**Corte Suprema de Justicia**  
Secretaría General

Bogotá D. C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinte (2020).

Se recibió en la Secretaría General de la Corporación, la acción de tutela instaurada por la señora BLANCA LIGIA ARANGO DE MUÑETÓN, contra la Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia.

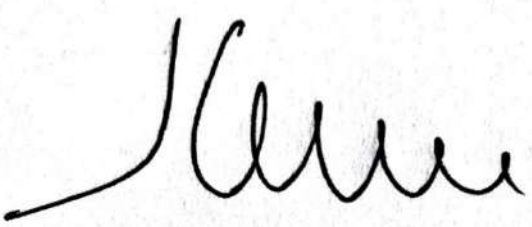
  
**DAMARIS ORJUELA HERRERA**  
Secretaria General

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SECRETARÍA GENERAL

No. 11- 001-02-30-000-2020-00607-00

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020  
Repartido al Magistrado


Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa

  
**JORGE LUIS QUIROZ ALEMAN**

El Presidente

\_\_\_\_\_

La Secretaria

  
\_\_\_\_\_

Bogotá, D.C., 2 SET. 2020

En la fecha pasa al Despacho del doctor Hernández Barbosa, Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corporación, a quien correspondió por reparto, la anterior acción de tutela.

Consta de 1 cuaderno con 39 folios.

  
**DAMARIS ORJUELA HERRERA**  
Secretaria General